

La hora de la verdad

JULIÁN SANTAMARÍA OSSORIO - 14/05/2006

Por fin se aprobó el Estatut tras más de dos años de arduas y complejas negociaciones a falta de su ratificación en el referéndum del próximo 18 de junio en que los catalanes se pronunciarán sobre el texto estatutario. Han sido dos años raros y difíciles, porque la prioridad concedida al Estatut ha dejado en la sombra algunos logros importantes del Govern y la política catalana ha sufrido demasiados vaivenes, sobre todo en los últimos meses. Por eso no es extraño que Catalunya viva al mismo tiempo un notable optimismo económico y un cierto desencanto político, y mientras aquél se mantiene estable, este último se hace más o menos explícito al hilo de los acontecimientos. Los avatares del tripartito, las cambiantes posiciones y actitudes frente al Estatut lo han reavivado estas últimas semanas.

Eso se traduce, entre otras cosas, en una caída muy notable de las evaluaciones positivas de la gestión del Govern en el último trimestre, mientras que en ese mismo tiempo aumentan las opiniones negativas sobre el president, desciende su popularidad y empeora la imagen de los partidos, salvo CiU e ICV, que mejoran ligeramente. En ese contexto, la decisión de ERC de pronunciarse por el no en el referéndum hacía imposible la continuidad del tripartito. Porque si el Estatut fuera rechazado en el referéndum, habría desaparecido su razón de ser, una vez derrotada la que ha sido su prioridad absoluta en esta legislatura, y si fuera aprobado, no tendría sentido encomendar su desarrollo a quienes se opusieron a su ratificación.

Maragall, brillante cuando actúa bajo presión, ha interpretado con dolorosa lucidez la voluntad de los catalanes poniendo fin en este momento al tripartito y anticipando que adelantará las elecciones. No tenía otra posibilidad. Gobernar es elegir dentro de un núcleo limitado de opciones. Las divergencias sobre un punto central del programa de gobierno lo condenan a la inacción y la parálisis, por lo que la minoría disidente está obligada o bien a sumarse al criterio mayoritario o bien a dimitir, y quien preside el gobierno, a exigir a los disidentes lo uno o lo otro. Antes de conocer la doble decisión de Maragall, la mitad de los

catalanes consideraba que la actitud de los republicanos carecía de toda justificación, seis de cada diez entendían que las diferencias internas del tripartito respecto al Estatut lo hacían ya inviable y, en congruencia con eso, la misma proporción coincidía en que antes o después del referéndum el president debería convocar el adelanto de las elecciones.

No es éste el lugar más adecuado para especular acerca de los riesgos políticos y electorales de esa decisión dentro y fuera de Catalunya. Lo que toca ahora es el Estatut, que los catalanes confiesen haber seguido con más interés del que parecía. Como es lógico, su contenido sólo lo conocen con algún detalle los sectores con niveles más altos de educación. Pero las actitudes respecto de la nueva norma son muy firmes y sugieren un amplio acuerdo en lo fundamental.

Por ejemplo, siete de cada diez entrevistados entiende que el nuevo Estatut mejora sustancialmente el actual. Más de tres cuartas partes aprueban la ampliación del autogobierno y casi seis de cada diez, el modelo de financiación, aunque la opinión está algo más dividida respecto a la denominación de Catalunya como nación. Y sólo uno de cada cuatro piensa que el nuevo texto estatutario no es satisfactorio ni para Catalunya ni para España o que sólo lo es para España, frente a tres de cada cuatro que piensan lo contrario. Lo mismo ocurre en relación con la importancia que para el futuro de Catalunya atribuyen a la aprobación definitiva del Estatut. Concretamente, tres cuartas partes afirman que su aprobación es muy importante o bastante importante de cara al futuro.

Sin duda, esas opiniones de conjunto presentan algunas diferencias significativas entre los electorados de los distintos partidos. En particular, el del PP se distancia sensiblemente de todos los demás y en algunos puntos concretos también el electorado de ERC se desvía del de PSC, CiU e ICV, pero se aproxima a ellos en algunos puntos críticos. Por ejemplo, la mitad de los votantes de ERC considera que el nuevo Estatut satisface los intereses de Catalunya, seis de cada diez admiten que representa un avance significativo respecto al actual, siete de cada diez coinciden en que su aprobación es

importante para el futuro de Catalunya y, en conjunto, son quienes en mayor medida respaldan la inclusión del término nación, la ampliación del autogobierno y la política lingüística. Sólo en materia de financiación el respaldo entre los votantes de ERC - un 50%- es algo inferior al que se registra entre los electores de sus antiguos socios o entre los de CiU.

¿Qué se puede esperar que ocurra en el referéndum ante una situación tan compleja? En principio, los datos de este y otros estudios anteriores muestran que existe un acuerdo razonablemente amplio favorable al Estatut en los términos en que ha sido aprobado. Predomina la idea de que supone un innegable avance en el autogobierno de gran importancia para el futuro del país y el 70% de los catalanes prefiere que el voto en el referéndum sea favorable al sí, frente a un 20% que desearía el triunfo del no. Finalmente, quienes declaran espontáneamente que votarán a favor, en torno al 58% de los consultados, supondrían - de acudir todos ellos a las urnas- un apoyo superior al que logró el Estatut de 1979. Eso induce a pensar que el resultado será positivo, claramente positivo, si los partidos que están oficialmente a favor de su aprobación se empeñan en un esfuerzo conjunto para llevar a sus seguidores a votar y a votar afirmativamente.

Dejemos las cosas claras. Sé muy bien que mi pronóstico se distancia un tanto de lo que piensan los actores políticos y, en buena medida, de las percepciones de los votantes. Entre los primeros, predomina la incertidumbre. Entre los votantes, no. Casi en su totalidad creen que el Estatut pasará la prueba del referéndum, aunque la mitad de ellos piensa que los resultados serán muy ajustados. Por mi parte, entiendo que en esas circunstancias el sí tiene muchas más probabilidades que el no y por un margen razonablemente amplio. La incertidumbre de los dirigentes favorables al sí debería llevarles a redoblar sus esfuerzos para estimular la participación de sus seguidores y el hecho de que la mitad de estos piense que el resultado está en el aire debería llevarles a las urnas para inclinar el resultado en la dirección preferida.

El referéndum es siempre un campo sembrado de minas. El de 1986, sobre la permanencia de España en la OTAN, lo ilustra muy bien. La derecha española se debatió entre la abstención y el no, argumentando que la propuesta del

Gobierno era insuficiente porque excluía la integración en la estructura militar. Nadie lo entendió, ni dentro ni fuera de España. Todo el mundo comprendió, en cambio, que habían intentado presentar como una cuestión de principios lo que sólo era una maniobra política orientada a debilitar o derrotar al gobierno de Felipe González. La derecha perdió una buena parte de su crédito en el exterior y tardó otros diez años en llegar al gobierno. También Miquel Roca mantuvo una posición similar en aquella campaña como prólogo al lanzamiento de un nuevo partido, el PRD que, pese a su generosa financiación, no llegó a obtener en las elecciones generales de aquel año ni el 1% de los votos.

JULIÁN SANTAMARÍA OSSORIO, Catedrático de Ciencia Política de la UCM y presidente de Noxa Consulting